



NUE 28-A-2020 (CE)

contra el Ministerio de Cultura (MICULTURA)

Resolución Definitiva

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las nueve horas con doce minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte.

### Descripción del Caso

I. La apelante [REDACTED] presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del **Ministerio de Cultura (MICULTURA)**, solicitud de acceso a información consistente en: "Información completa sobre las partidas presupuestarias asignadas a la Unidad de Género y Diversidad del MICULTURA en la Ley del Presupuesto General de la Nacional del 2019 y 2020, así como cualquier otra información relativa al financiamientos de los programas, planes y proyectos que dicha unidad realizará durante el año 2020, especificando aquellos que beneficiarán a la población LGBTF".

En relación con ello, el oficial de información del **MICULTURA** resolvió no dar trámite a la solicitud de información en razón de que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 74 letra "b", el hecho de encontrarse publicada la documentación requerida, tiene como efecto la declaratoria de improcedencia de la solicitud.

II. La apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al art. 82 de la LAIP, el cual fue admitido y asignado a la comisionada **Claudia Liduvina Escobar Campos** para dar trámite e impulso a este procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

III. Durante la instrucción de este procedimiento, la comisionada instructora con la simple vista de la documentación que yace agregada al expediente en comento, determinó que el procedimiento quedó reducido a una cuestión de derecho, en atención a líneas



resolutivas emitidas por este Instituto y de conformidad con los Arts. 102 de la LAIP y Art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), por lo que se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso.

### **Análisis del Caso.**

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** procedencia del procedimiento reducido a una cuestión de derecho; **(II)** consideraciones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); **(III)** naturaleza de la información solicitada y obligación de entregarla.

**I.** De conformidad a lo establecido en el Art. 163 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), en relación con el Art. 135 Inc. 3° de la misma norma, en el auto de admisión, se requirió a las partes en este procedimiento, que señalaran si ofrecieran medios probatorios que no consten en el expediente administrativo a efecto de valorar la apertura a prueba del presente procedimiento. Dicho auto fue notificado el **6 de marzo de 2020**, sin que se haya recibido respuesta de las partes en tal sentido.

De igual forma, la jurisprudencia contencioso administrativa<sup>1</sup>, acompaña el criterio seguido por la administración pública, que cuando no se trata de controvertir hechos, sino de la aplicación del derecho al caso en particular, resulta aplicable lo establecido en el artículo 309 del CPCM, normativa supletoria aplicable de conformidad con el artículo 102 de la LAIP referido a que “...*si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia*”.

Por tanto, la Sala manifestó que la omisión de la audiencia establecida en el Art. 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación, de dicho artículo, y el 102 de la LAIP.

---

<sup>1</sup> Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.

En ese orden de ideas, este Instituto se ve facultado para someter el presente procedimiento de apelación, a una cuestión de mero derecho, con base a la aplicación de normas y principios de la LAIP, así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el Art. 102 de la LAIP y Art. 309 del CPCM.

II. El acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn) pero que, a pesar de ello, tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. El derecho de acceso a la información pública comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*. Este derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

Asimismo, el Art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.

El Art. 6 letra "c" de la LAIP establece que es **información pública** aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Para la entrega de la información, la LAIP ha diseñado un proceso expedito en el que los oficiales de información cumplen un rol importante al realizar gestiones encaminadas a satisfacer el derecho de toda persona a acceder a la información pública.



Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que este derecho no es absoluto y es susceptible de restricciones condicionantes en su pleno ejercicio. No obstante, los límites de este derecho no pueden ser arbitrarios, sino plenamente establecidos por el legislador, a efecto de prevenir que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información solicitada por cualquier persona.

**III.** En este sentido, dentro de este apartado resulta dable delimitar la naturaleza de la información solicitada y que ahora es objeto de controversia.

Como bien es sabido, la información relativa a presupuestos asignados a los entes obligados constituye información pública, pues la misma supone el parámetro de acción financiera que se tiene dentro de un ejercicio fiscal determinado.

Con relación a este tipo de información y de conformidad al principio de transparencia activa, existe un catálogo de información pública que tiene que estar disponible, completa y actualizada para toda persona sin necesidad que se realicen solicitudes de información para obtenerla, según lo establece el Art. 6 letra “d” de la LAIP, surgiendo así la categoría de información pública oficiosa, la cual se encuentra desarrollada en el Art. 10 de la LAIP. Es necesario mencionar que, si bien ambos tipos de información tienen en común el principio de máxima publicidad, la diferencia en ellos radica en la manera de publicarla, dicho en otras palabras, la información pública oficiosa debe estar disponible sin necesidad de solicitud de información, mientras que para acceder a la información pública no oficiosa los particulares deben requerirla por medio de los mecanismos legales pertinentes.

Ahora bien, aunado a lo anterior, de acuerdo al Art. 10 numeral 4 de la LAIP, el presupuesto asignado a los entes obligados resulta, de manera expresa, información pública oficiosa, la cual se ciñe a disposiciones especiales como bien lo es, para el caso en particular, el Lineamiento 2 para la Publicación de Información Oficiosa, la cual señala en su Art. 1.4 *“Presupuesto: se publicará el presupuesto inicial asignado detallando su origen o fuente, así como las modificaciones que dicho presupuesto haya experimentado. En este mismo apartado deben incluirse los informes contables sobre la ejecución del presupuesto actualizado al menos cada seis meses...”*. Dicho lo anterior, cabe recalcar que si bien no existe una obligación formal dentro de la normativa positiva vigente que obligue a los entes

obligados a que se genere información relativa al presupuesto asignado de manera cómo ha sido solicitada para el caso de mérito, se ha de considerar una buena práctica otorgar su acceso posteriormente se haya adecuado la información requerida en el formato solicitado por los apelantes a fin de dotar de prevalencia el criterio de máxima publicidad respecto de la información que almacenan, generan o administran los entes obligados.

Todo lo anterior descansa en el prefacio que, aunque la información solicitada no constituye per se información pública oficiosa, no significa que no siga constituyendo información pública, por lo cual la respuesta otorgada a la apelante obstaculiza el control ciudadano y la fiscalización de la gestión gubernamental. Como consecuencia de ello, se considera que existe una obligación, de entregar la información requerida por la apelante en los términos expuestos en su solicitud inicial; es decir, aclarando el presupuesto asignado a la Unidad de Género y Diversidad del MICULTURA en la Ley del Presupuesto General de la Nacional del 2019 y 2020, así como cualquier otra información relativa al financiamientos de los programas, planes y proyectos que dicha unidad realizará durante el año 2020, especificando aquellos que beneficiarán a la población LGBTI.

#### **Decisión del Caso.**

a) **Revocar** la resolución emitida por el oficial de información del **Ministerio de Cultura (MICULTURA)** el 9 de enero de 2020 y notificada el 21 del mismo mes y año, en los términos dispuestos en esta resolución.

b) **Ordenar** al oficial de información de **MICULTURA**, que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, le entregue a [REDACTED] la información correspondiente a: Información completa sobre las partidas presupuestarias asignadas a la Unidad de Género y Diversidad del MICULTURA en la Ley del Presupuesto General de la Nacional del 2019 y 2020, así como cualquier otra información relativa al financiamientos de los programas, planes y proyectos que dicha unidad realizará durante el año 2020, especificando aquellos que beneficiarán a la población LGBTI.

c) **Ordenar a MICULTURA** que, por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste que se le dio trámite a la solicitud de información del apelante, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: [oficialreceptor@iaip.gob.sv](mailto:oficialreceptor@iaip.gob.sv)

d) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

*Notifíquese.-*



**PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN**

CS/JH/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte.

José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

